

C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.

**Vistos y teniendo presente:**

Se ha interpuesto recurso de nulidad por la abogada doña **Claudia Martínez Valle**, Defensora Penal Pública, en representación del condenado **Álvaro Ignacio Ahumada Antileo**, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Colina, de fecha 19 de julio del año en curso, que condenó al acusado, a las siguientes penas:

a)- Seis años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de un delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436, en relación al artículo 432 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, cometido el día 9 de mayo de 2022, en la comuna de Colina, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b)- Tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, como autor de un delito de tenencia ilegal de armas, previsto y sancionado en el artículo 9° en relación al 2° letra b) de la Ley N° 17.798, en grado de desarrollo consumado, cometido el día 9 de mayo de 2022, en la comuna de Colina, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más comiso del arma incautada.



c)- Incorporación de la huella genética en el Registro Nacional de Condenados.

Se ordenó que las penas corporales indicadas deberán cumplirse en forma efectiva, sirviéndole de abono el período que se reconoce en la sentencia.

Funda el recurso en una única causal, la contenida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 385 del mismo texto legal, toda vez que señala que se ha aplicado erróneamente la norma contenida en el artículo 449 del Código Penal, sobre la determinación de la pena.

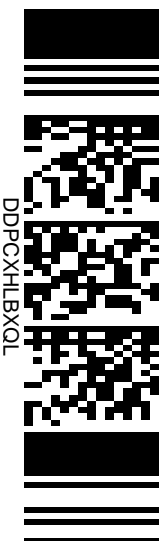
Pide que se acoja el recurso por la causal invocada y se anule la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo, determinando la pena que legalmente le corresponde a su representado.

El recurso fue declarado admisible según resolución de diez de agosto del mismo año, y, la vista del mismo se llevó a cabo el veintinueve de agosto último.

**Considerando:**

**Primero:** Que, en cuanto a los fundamentos que esgrime para justificar la causa de invalidación, expone que la sentencia recurrida ha hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en aquella parte en que determina la pena que le cabe a su representado por el delito de robo con intimidación.

Alude la defensa que, para ello, debió considerarse que el artículo 449 del Código Penal, impide la aplicación de las



reglas generales contenidas en los artículos 65 al 69 del mismo texto legal. Estima que a su defendido le favorecen dos atenuantes, las contempladas en el artículo 11 número 6 y 9 del mismo cuerpo normativo, reconocidas en el fallo que se revisa, por lo que encontrándose en la situación del numeral 1° del artículo 449 del citado código, el tribunal debía determinar la cuantía de la pena atendiendo al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y la mayor o menor extensión del mal causado, debiendo además fundamentarlo en la sentencia.

Sin embargo, señala que el tribunal determinó la pena en el *mínimum* imponiendo una de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, y si bien consideró que concurrían dos atenuantes y ninguna agravante, fundamentó el *quantum* determinado por una mayor extensión del mal causado, por haber intimidado a 3 víctimas y por el hecho de haberse disparado el arma al interior del local causando daños. Alega que tales circunstancias, ya fueron valoradas por los sentenciadores para configurar los delitos de robo con intimidación y tenencia de arma de fuego.

Así, considera el recurrente que de haber realizado el tribunal una correcta aplicación de la norma contenida en el citado artículo, implicaba haber impuesto a su defendido una pena 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito en comento.



**Segundo:** Que, como se ha dicho, ha de tenerse en cuenta que la causal consistente en la errónea aplicación del derecho, concierne entera y exclusivamente a la revisión del juzgamiento jurídico del caso o, lo que es lo mismo, al “juicio de derecho” contenido en la sentencia. De ahí que lo decisivo en la aplicación judicial del derecho no sería sólo la aplicación propiamente dicha de los enunciados jurídicos, sino que, especialmente las razones que se vierten para privilegiar unos frente a otros que pudieran ser pertinentes, los motivos que se expresan para asignar a las normas un significado específico en desmedro de otros posibles, la justificación del por qué los hechos probados encuadran en alguna categoría jurídica determinada y las reflexiones dirigidas a dirimir cuál es la consecuencia jurídica correcta, dentro de las alternativas que el derecho pueda plantear.

**Tercero:** Que la sentencia, en mérito del considerando Décimo séptimo, dispuso: *“Determinación de la cuantía exacta de las penas privativas de libertad. El delito de robo con intimidación, conforme al artículo 436 del Código Penal, tiene asignada una pena de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo.*

*Conforme al marco penal rígido establecido en el artículo 449 del Código Penal respecto de este tipo de delitos, la pena en concreto se determinará dentro de los límites ya señalados.*

*De esta forma, considerando que al encartado le favorecen dos atenuantes y ninguna agravante, se establecerá*



*la pena en el grado mínimo del marco penal, a saber, la de presidio mayor en su grado mínimo.*

*Dentro de este grado, se tendrá en consideración la extensión del mal causado para efectos de determinar la pena en concreto. En ese sentido, se tiene presente que una de las víctimas, a saber, Guillermo Villarroel, manifestó haber recuperado su dinero, razón por lo cual no existió para él daño pecuniario. Sin perjuicio de lo anterior, se considera particularmente relevante la intimidación efectuada por el autor a tres víctimas distintas, con un arma de fuego que incluso fue disparada al interior de la tienda, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad física de dichas víctimas, y causando un daño cierto a su integridad psicológica y sensación de seguridad, según dieron cuenta en sus declaraciones.*

*En consideración a lo anterior, no se establecerá la pena en el mínimo dentro del referido grado, y se impondrá la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo”.*

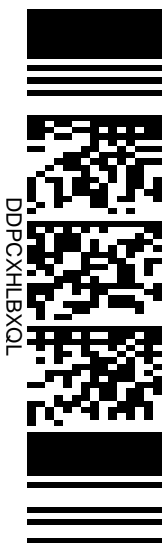
**Cuarto:** Que, el fundamento del recurso en esta causal no podrá ser acogido desde que la sentencia hizo una correcta calificación jurídica al momento de determinar la pena, explicando claramente por qué motivo se impone por el delito de robo con intimidación una de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales. Así, en primer término, establece cuál es la pena asignada al delito de robo con intimidación; posterior a ello analiza el marco rígido del artículo 449 del Código Penal, luego pondera la existencia de



dos atenuantes, sin que existan agravantes, y teniendo en consideración la extensión del mal causado por los fundamentos que detalla, permitió justificar adecuadamente la que impuso en definitiva.

En ningún caso aparece una doble valoración de las circunstancias en que se pondera la extensión del mal causado y aquellas determinadas al momento de describir los hechos que configuran el delito de robo con intimidación, máxime cuando los sentenciadores consideran que además de ponerse en riesgo la vida e integridad física de las víctimas, de sus propias declaraciones aparece evidente según detallan, que se causó un daño a su integridad psicológica y sensación de seguridad, circunstancias que no formó parte de la descripción fáctica del delito de robo con intimidación, sino que corresponde a una ponderación precisamente destinada a definir el nivel del mal causado-, lo que justifica entonces haber impuesto la pena que se reclama.

**Quinto:** Que, en estas circunstancias, teniendo en cuenta que la sentencia ha realizado una correcta determinación de la pena aplicable dentro del marco que contempla el artículo 449 del Código Penal, no se divisa el vicio que por esta vía se denuncia, razones por las cuales este recurso deberá ser desestimado. Además, se tiene presente que los juzgadores aplicaron la pena en el rango legal, luego de considerar las atenuantes en favor del acusado, razón por la cual lo reclamado por esta vía carece de influencia en lo resolutivo por



la decisión por cuanto los sentenciadores estaban autorizados para recorrer toda la extensión del grado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que disponen los artículos 372, 373, 374, 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la abogada **Claudia Martínez Valle**, Defensora Penal Pública, en representación del condenado **Álvaro Ignacio Ahumada Antileo**, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Colina, de fecha dieinueve de julio del año en curso, en causa RIT 39-2023 y RUC 2200448770-6, la que, en consecuencia, no es nula.

**Regístrese y comuníquese.**

Redacción de la Ministra (s) Andrea Díaz-Muñoz Bagolini.

No firma la Ministra señora Book, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio.

**N°Penal-4005-2023.**



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Ministra Suplente Andrea Diaz-Muñoz B. Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

